

Expediente 98-0055-v

Sentencia N°058 Tribunal Aduanero Nacional, San José, a las dieciseis horas del día 1 de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Federico Zúñiga Gómez, en su condición de Agente Aduanero N° 194 y en representación de la Agencia de Aduanas Servicios Neptuno S.A., contra resolución AL 130-98 de 21 de abril de 1998, emitida por el Lic. Gerardo Bolaños Alvarado en su condición de Director General de Aduanas.-

### RESULTANDO

- I. Que con resolución ACT-M-60-97 de las 14 horas del día 22 de abril de 1997 la Aduana Central inició procedimiento ordinario contra la Agencia Servicios Aduaneros Neptuno S.A. tendiente a imponer a la citada agencia una multa de quinientos pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, monto que se reduce al 25% según el numeral 233 de la Ley General de Aduanas, en adelante LGA, para un total de 27.223.00 colones, por haber declarado en la declaración aduanera N° 106775 de fecha de aceptación 22 de noviembre de 1996 un valor aduanero de \$14.598.40 siendo lo correcto \$13.841.85 (Folios 2y 3 expediente de la Aduana)
- II. Que con escrito N° 4186 de fecha de recibido 28 de mayo de 1997 el señor Álvaro Zúñiga González, en representación de la Agencia de Aduanas Servicios Neptuno S.A. se presentó en tiempo a contestar y presentar alegatos. (Folios 4 y 5 expediente de la Aduana)
- III. Que en resolución N°1099/AC-97 de las 10 horas con 25 minutos del 4 de agosto de 1997 la Aduana Central resolvió rechazar los alegatos y sancionar a la Agencia de Aduanas Servicios Neptuno S.A., por comisión de una infracción administrativa regulada en el artículo 236 inciso k de la Ley General de Aduanas, confirmando la multa citada. (Folios 6 y 7 expediente de la Aduana)
- IV. Que el afectado en escrito N° 6461 de 11 de agosto de 1997, presentó los recursos de reconsideración y revisión jerárquica contra la citada resolución. (Folio 9 expediente de la Aduana)
- III. Que en resolución N° 1199 A.C.-97 de las 13 horas y 35 minutos del día 18 de agosto de 1997, la Aduana Central rechazó el recurso de reconsideración y aceptó el

de revisión jerárquica emplazando a la parte. (Folios 10 y 11 expediente de la Aduana)

- IV. Que el recurrente se apersonó en tiempo ante la Dirección General de Aduanas a través de oficio GO.0618-97 de fecha 25 de agosto de 1997. (Folio 1 expediente administrativo)
- V. Que la Dirección General de Aduanas con resolución A.L. 130-98 de las 15 horas con 45 minutos del 21 de abril del año en curso, declaró sin lugar el recurso de revisión interpuesto.(Folios 2 a 6 expediente administrativo)
- III. Que el afectado interpuso en tiempo recurso de apelación ante este Tribunal contra la citada resolución, a través de escrito G.O. 203-98 de 30 de abril de 1998 (Folio 14 expediente administrativo) el cual fue admitido por la Dirección General de Aduanas a través de resolución Al 218-98 de las 9 horas con 30 minutos del 8 de junio de 1998 emplazando al interesado (Folios 24 y 25 expediente administrativo)
- IV. Que el apelante se apersonó en tiempo ante este Tribunal a través de escrito de fecha de recibido 25 de junio de 1998 (Folios 15 a 18 expediente administrativo)
- V. Que mediante Providencia N° 15 de las 8 horas del 22 de junio de 1998, este Tribunal solicitó la remisión de documentación faltante a la Dirección General de Aduanas a efecto de completar el expediente (Folio 19 expediente administrativo)
- VI. Que la Dirección General de Aduanas aportó lo solicitado con oficios de remisión Al 685-98 de 30 de junio y Al 827 de 24 de agosto ambos de 1998 (Folios 23 a 25 y 33 a 44 expediente administrativo).-
- VII. Que mediante Auto N° 027-98 de las 9 horas y cincuenta minutos del 28 de julio de 1998, este Tribunal acogió las inhibitorias presentadas por los Licenciados Desiderio Soto Sequeira y Shirley Contreras Briceño teniéndolos por separados del conocimiento del presente asunto. A efecto de conocer el mismo se integra a este tribunal los miembros suplentes Lic. Jose Alberto Martínez Loría nombrado por Acuerdo Presidencial No. 80-H del 26 de noviembre de 1998 por el período comprendido entre el 26 de noviembre al 04 de diciembre de 1998 y el Lic. Ronald Garita López nombrado por Acuerdo Presidencial No. 81-H del 26 de noviembre de 1998 por el período comprendido del 30 de noviembre al 04 de diciembre de 1998.
- V. Que el recurrente fundamenta sus pretensiones y alegatos en: a) Es improcedente la sanción de la multa por considerar que los hechos en que se fundamenta no constituyen faltas que tengan la posibilidad de ser sancionadas. b) El consignar un mayor valor aduanero del que resulta del precio consignado en la factura comercial elimina cualquier elemento intencional y culpable de querer perjudicar al Estado. c ) No se ha demostrado la culpa y el citado error no constituye una transgresión grave, intencional ni dolosa, sino que lo que provocó fue un mayor pago de

impuestos, lo que efectivamente la Aduana corrige y procede a la correspondiente devolución. d) Si el error no fue sancionado en vía administrativa y contra el funcionario que realizó el aforo documental, tampoco puede producirse sanción contra el auxiliar. e) La sanción no es proporcional, sino excesiva por la aplicación de \$500 pesos centroamericanos por un error de ¢ 43 colones. f) De previo a resolver solicita una audiencia oral y privada ante este órgano. g) En consecuencia, solicita que el Tribunal se pronuncie sobre la improcedencia de la sanción pretendida.

- VI.** Que en las presentes diligencias se han observado las prescripciones legales en la tramitación del recurso de apelación.-

Redacta la Licenciada Loretta Rodríguez Muñoz: y

### **CONSIDERANDO**

- I.** Las competencias del Tribunal Aduanero Nacional se encuentran señaladas en el Título IX, capítulo único de la Ley General de Aduanas, la impugnación de actos finales dictados por la aduana se regulan en los artículos 198 y siguientes del mismo cuerpo legal, estableciéndose en el artículo 203 el recurso de apelación contra la resolución dictada por la Dirección General de Aduanas. El presente asunto se refiere a la imposición de una multa a un agente aduanero por la presentación de la declaración aduanera con errores e inexactitudes. Las normas referentes al Agente Aduanero son los artículos 94 y siguientes de la L.G.A., los artículos 28 y siguientes de la supra citada ley referente a las disposiciones generales de los auxiliares de la función pública. Asimismo las infracciones administrativas y tributarias aduaneras están prescritas en los artículos 230 y siguientes del mismo cuerpo legal.
- II.** El órgano a quo ha procedido a sancionar a la Agencia de Aduanas Servicios Neptuno S.A. por considerar que incurrió en la conducta tipificada en el numeral 236 inciso k) de la L.G.A. al haberse determinado que la agencia declaró un valor aduanero de \$14.598.00 en la declaración aduanera N° 1066775 de fecha de aceptación 22 de noviembre de 1996 de la Aduana Central, siendo lo correcto un valor aduanero de \$13.8841.85. Por tanto, para resolver lo correspondiente, debe analizarse la participación de la agencia en los hechos que se le atribuyen y cuáles son sus responsabilidades dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Para tal efecto es necesario revisar las regulaciones referentes a la actuación del agente aduanero. El CAUCA II en su artículo 94 lo define como un auxiliar de la función pública que actúa en su carácter de persona natural, brindando servicios a terceros en forma habitual, en toda clase de trámites, regímenes y operaciones aduaneras. A su vez el numeral 95 reafirma el desempeño personal del agente y el 98 remite a la legislación nacional para el establecimiento de infracciones, sanciones y procedimiento para su aplicación. Por su parte, el Transitorio Unico del mismo cuerpo legal señala que

“En aquellos países signatarios en que hubieren autorizado en el ejercicio de Agentes Aduaneros a personas jurídicas, la legislación nacional establecerá el régimen jurídico a que deberán someterse en el momento de entrar en vigencia el presente Código.”

- III. La LGA, en su capítulo II, artículos 33, 34 y 35, reitera el carácter personal con que actúa el agente y establece el marco jurídico que guía sus actuaciones. Con respecto al régimen jurídico y responsabilidad de los agentes aduaneros personas jurídicas, la misma ley señala en su artículo 253 que “Las empresas que ostenten la condición de agentes aduaneros personas jurídicas en el momento de publicarse esta ley, deberán cumplir con las obligaciones y responsabilidades establecidas para el auxiliar de la función pública aduanera y con el régimen jurídico que esta ley impone para el agente aduanero persona física, conforme al Título III, Capítulos I y II de esta ley, incluyendo las disposiciones relativas a la rendición de garantía. Estas empresas deberán contar, por lo menos, con un agente aduanero en forma exclusiva y permanente para intervenir en regímenes y operaciones aduaneras. Estos agentes representarán a la persona jurídica ante el Servicio Nacional de Aduanas.” (El subrayado es nuestro). Se concluye que coexisten en nuestro sistema aduanero agentes aduaneros persona natural o física que actúan directa e independientemente ante el Servicio Aduanero Nacional y agentes aduaneros personas jurídicas que actúan a través de un agente aduanero persona física que los representa ante el Servicio Aduanero Nacional.
- IV. En lo referente a la responsabilidad del agente Aduanero, persona física o jurídica, existe responsabilidad frente al cliente según lo prescrito en el artículo 33 al ser el representante legal de su mandante para las actuaciones del despacho aduanero y los actos que de él se deriven, por lo que es responsable civil ante su cliente por las lesiones patrimoniales que origine el ejercicio de su mandato. Asimismo según lo establecido en los artículos 97 párrafo 2 del CAUCA II, 33 y 254 párrafo I LGA, responde ante el Fisco tanto patrimonialmente como por las infracciones y los delitos en que incurran sus asistentes y personal acreditado. Además de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del CAUCA II y artículo 36 es responsable solidario por el pago de obligaciones, intereses, multas y demás recargos derivados de las operaciones aduaneras en que interviene.
- V. Concretamente en materia sancionatoria es imperativo efectuar una distinción según se trate de agente aduanero persona física o jurídica. En términos generales la persona física responde cuando su conducta se enmarca en algunas de las infracciones tipificadas en la legislación y le sea atribuida a título de dolo o culpa sin que concurra ninguna eximente de responsabilidad. en materia sancionatoria se dispone en el artículo 254 de la LGA que literalmente expresa: *“Las empresas asumirán la responsabilidad, en forma solidaria, por los hechos y actos de sus dependientes cuando se derive un perjuicio tributario. Sin perjuicio de las obligaciones y los deberes previstos para los agentes aduaneros y de las sanciones aplicables por su ejercicio personal, los representantes legales de la persona*

*jurídica serán responsables de girar las instrucciones, proveer los instrumentos necesarios para la correcta gestión de intermediación aduanera y cumplir con las obligaciones que no correspondan al agente aduanero persona física por su relación laboral”.*

***Las sanciones previstas en esta ley se impondrán a la persona jurídica cuando se demuestre que los representantes legales o los personeros de la empresa han propiciado actos o hechos que posibilitan la sanción de conformidad con lo expuesto en el párrafo anterior; caso contrario, responderá únicamente el agente de aduanas acreditado”.*** (La negrita es nuestra)

Sobre la responsabilidad de las personas jurídicas tanto la doctrina como la legislación comparada han establecido claramente su condición de sujetos infractores, tal como se denota en el artículo 77 de la Ley General Tributaria en España, sobre el cual distinguidos tratadistas han indicado:

“En primer lugar, llama la atención la responsabilidad de las personas morales. Conocido es el aforismo “societas delinquere non protest”, de plena aceptación en el Derecho penal (art. 15 bis, CP). Sin embargo, en Derecho Tributario la sanción puede imputarse a la persona jurídica, si bien se contempla la extensión de responsabilidad a los administradores (art. 40.1, LGT), por lo que el esquema es el inverso a la técnica penal. He aquí un ejemplo de cómo los principios penales han de aplicarse necesariamente con ciertos matices en el campo tributario, pues lo que nunca podrá hacer el Derecho penal será cercenar la autonomía del Derecho Fiscal”. En ese mismo sentido el Tribunal Constitucional Español ha reconocido “...la capacidad infractora de las personas jurídicas, sin suprimir el elemento subjetivo, que ha de ser aplicado en forma distinta al de las personas físicas: (sic) Esta construcción distinta de la imputabilidad de la autoría de la infracción a la persona jurídica a la que responden estos sujetos. Falta en ellos el elemento volitivo en sentido estricto, pero no la capacidad de infringir las normas a que están sometidas”.

Concretamente en nuestro país la Sala Constitucional reiteradamente ha manifestado que: “La doctrina más importante en esta materia ha señalado que resulta constitucional y legalmente posible la aplicación tributaria y porque al carecer dichas sanciones de pena privativa de libertad, no debe estar presente el principio de la personalidad de la pena que deriva del principio de la culpabilidad. De modo que, cuando se trata de ilícitos que no establecen la cárcel como sanción, las personas jurídicas pueden ser sujetos activos de tales ilícitos administrativos”.

- VI. Debe determinarse en consecuencia, si en el caso concreto existen suficientes elementos en expediente que permitan demostrar que los representantes legales o los personeros de la empresa han propiciado actos o hechos que posibiliten la sanción que se ha impuesto. Nótese que en el presente asunto la pena ha sido interpuesta por haberse cometido una infracción administrativa, al presentarse una declaración aduanera con errores o inexactitudes, por lo que necesariamente debemos abordar este tema. Al respecto el artículo 86 de la LGA dispone:
- “...Con la declaración se expresa libre y voluntariamente el régimen, la cual van a ser sometidas las mercancías y se aceptan las obligaciones que el régimen impone.

La declaración aduanera efectuada por un agente aduanero se entenderá realizada bajo la fe de juramento. El agente aduanero será responsable de suministrar la información y los datos necesarios para determinar la obligación tributaria aduanera, especialmente respecto a la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, cantidad, tributos aplicables, cumplimiento de las regulaciones arancelarias y no arancelarias que rigen para las mercancías, de conformidad con lo previsto en esta ley, otras leyes y disposiciones aplicables”.

Este Tribunal estima necesario aclarar que no se está prejuzgando en este caso sobre la participación agente persona física, lo cual sería evidentemente violatorio del derecho de defensa, sino de que la Administración no ha probado que se dieron los presupuestos de hecho para sancionar a la persona jurídica, indicando únicamente que la Agencia de Aduanas Servicios Aduaneros Neptuno presentó la declaración aduanera con un valor aduanero erróneo. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial por efecto de las infracciones y delitos en que incurra el personal acreditado ante el Servicio Nacional de Aduanas (arts. 97 del CAUCA II, 33 y 254 LGA), u otras responsabilidades.

En consecuencia, a criterio de este Tribunal, no es posible sancionar con multa a la persona jurídica, por cuanto no demuestra la Administración que haya concurrido en la especie los supuestos regulados pro el artículo 254, ni aporta pruebas al respecto, advirtiéndose vicios del acto administrativo.

- VII.** La LGA en su numeral 128 establece que será válido el acto administrativo que se conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico. En consecuencia la invalidez de un acto administrativo es su disconformidad con el ordenamiento jurídico, entendido este último con el conjunto de reglas escritas y no escritas que regulan el acto y configuran su esquema legal. Por tanto, la discrepancia del acto frente a este esquema es la causa y esencia de su invalidez. Uno de los elementos que constituyen el acto administrativo es precisamente el motivo, el cual la misma LGA lo define de la siguiente forma:

*“1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta a la hora de dictar el acto”...*

Entendemos entonces, conforme a la ley y a la doctrina, al motivo del acto administrativo con el antecedente jurídico que hace posible o necesaria la emisión del acto de conformidad con la ley; es su antecedente legal.

Ahora bien, la falta de motivo produce la nulidad absoluta del acto, porque impide en forma total el cumplimiento del fin público que aquel persigue.

En el presente asunto, por todo lo expuesto, al haber iniciado el órgano a quo el procedimiento administrativo fundamentándose en hechos y normas que no se aplicaban a la persona jurídica, toda vez que no consta su participación en los hechos investigados, calificando erróneamente el sujeto activo de la infracción, se ha generado un acto administrativo inválido, contrario a nuestro ordenamiento jurídico, al faltar como se ha indicado, uno de sus elementos constitutivos: el motivo o presupuesto de hecho que la facultaban para sancionarla, afectando asimismo el contenido y el fin, debiendo este Tribunal decretar nulidad absoluta de todo lo actuado de conformidad con las pretensiones del recurrentes y con lo

establecido por los artículos 128, 129, 131, 132, 133 y concordantes y numerales 165 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que pueda iniciar la Administración Activa, para comprobar la posible comisión de la infracción que refiere el presente asunto en consecuencia, por innecesario no se entran a conocer los otros alegatos del apelante.

### **POR TANTO**

Con base en las facultades otorgadas por el artículo 91 de CAUCA II, numerales 205, 254 y transitorio III de la Ley General de Aduanas este Tribunal resuelve: anular todo lo actuado en el presente caso. Voto salvado del Lic. Reyes Vargas que declara mal admitido el recurso. Devuélvanse los antecedentes a la oficina de origen. Notifíquese al señor Federico Zúñiga Gómez en representación de la Agencia de Aduanas Servicios Neptuno S.A. al facsimil doscientos veintisiete-cuarenta y tres-noventa y cinco (227-43-95) por haberlo solicitado así el recurrente y a la Dirección General de Aduanas en sus oficinas centrales.

Loretta Rodríguez Muñoz  
Presidenta

Alejandra Céspedes Zamora

Dick Rafael Reyes Vargas

Luis Alberto Gómez Zamora

Elizabeth Barrantes Coto

Ronald Garita López

José Alberto Martínez Loría

VOTO SALVADO DEL LICENCIADO REYES VARGAS. Origen y naturaleza de la pretensión del recurrente. El presente recurso, se origina en proceso sumario, iniciado por la Aduana Central, dirigido a determinar si la errónea indicación del valor aduanero, efectuada por el agente aduanero SERVICIOS ADUANEROS NEPTUNO S.A. en la declaración aduanera a la importación número 106775 de noviembre 22 de 1996, constituye la infracción descrita y sancionada en el numeral 236. k de la Ley General de Aduanas, en adelante LAN, y de ser así, imponer y ejecutar la sanción. Mediante resolución número 1099-AC-97 de agosto 4 de 1997 la aduana estima existe la infracción e impone la pena. Es respecto de tal acto, que el señor Federico Zúñiga Gómez, en su calidad de agente aduanero y en representación de la sociedad Agencia de Aduanas establece la alzada para ante este Tribunal.

Naturaleza del Tribunal Aduanero Nacional. Estimo pertinente, a efecto de resolver, tenerse presente la naturaleza jurídica del Tribunal Aduanero Nacional, en adelante TAN, con el propósito de determinar sus competencias y potestades a la hora de decidir. A tales efectos, recordemos que dicho Tribunal, tiene idéntica naturaleza que el Tribunal Fiscal Administrativo, respecto del cual, la Sala Constitucional en su voto número 1148-90 de las 17 horas de setiembre 21 de 1990, en lo de interés indico:

“Así por ejemplo, no parece incompatible con la Constitución la existencia del Tribunal Fiscal Administrativo ( Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ley No. 4755 de 3 de mayo de 1971), en la medida en que, si bien se integra y funciona de manera semejante a la de los tribunales de justicia – “tribunales” propiamente dichos -, en realidad solo es un órgano de tutela administrativa o jerárquico impropio respecto de la llamada “Administración Tributaria”, y sus fallos no tienen otro efecto que el de agotar la vía administrativa, abriendo paso a la acción jurisdiccional propiamente dicha.”

Por otro lado, la Procuraduría General de la República, en su pronunciamiento número C-012-98, de enero 21 de 1998, ha señalado claramente que es al TAN a quien corresponde, en virtud de una desconcentración máxima de la materia aduanera, resolver en última instancia administrativa de los recursos que se presenten contra el Servicio Nacional de Aduanas.

En virtud de lo anterior tenemos que el TAN, resulta en un superior no jerárquico de la llamada Administración Aduanera. Tal situación, la de jerarca impropio, no es exclusiva del TAN, sino que opera desde hace mucho tiempo respecto de otras administraciones como la registral, la técnica de aviación civil, la municipal, cuyo superior jerárquico resulta ser el Tribunal Superior De lo Contencioso Administrativo, la Tributaria cuyo competencia de agotamiento de vía le corresponde al Tribunal Fiscal Administrativo, siempre en tratándose de tributos nacionales, la de servicio civil que agota el Tribunal de Servicio Civil, etc. Los recursos ante tales órganos de agotamiento de la vía administrativa, como se observa, son no jerárquicos en sentido estricto, por lo que se les conoce como



jerárquicos impropios. Su competencia, se justifica en la necesidad de que, un órgano especializado, jurídica y técnicamente, como autónomo en su decisión, es decir ajeno a criterios de oportunidad, conveniencia, y otros, revise la legalidad de los actos de tales administraciones, de manera que en esta forma se mejore el estado de derecho en que se fundamenta nuestra organización como estado.

En virtud de los fines y competencias asignados a los jerarcas impropios, y con el fin de evitar la tendencia humana de invadir competencias, es que a los mismos se le fija una serie de limitaciones en el ejercicio de la suya propia. Entre ellas, tenemos la imposibilidad de revisar oficiosamente las actuaciones de la administración A Quo, la de anular de oficio, la de conocer únicamente por vía recursiva y limitado a las pretensiones y cuestiones de hecho planteadas por el recurrente ( arts. 180, 181, 184 de la Ley General de la Administración Pública, en adelante LGAP.)

Incompetencia del Tribunal Aduanero Nacional en materia de nulidades. Es claro entonces que el TAN, en materia de nulidades, tiene limitada su competencia a conocer de aquellas que expresamente aleguen las partes y que en virtud de recurso se le autorice su conocimiento. Dicha competencia, cuando así se le otorga, viene limitada a su vez, y de manera estricta, a los aspectos alegados por las partes, no pudiendo conocer de manera amplia o extensiva las mismas, por lo que se debe limitar a señalar la existencia o inexistencia de los motivos de nulidad expresamente alegados.

El presente caso. En el caso de marras, el suscrito disiente del voto de mayoría, en virtud de las siguientes situaciones:

Primero porque el voto de mayoría, sin existir nulidad alegada en instancia alguna, decreta oficiosamente la misma, a criterio del suscrito, en abierta contradicción con lo establecido por el numeral 184 de la LGAP, como de los numerales 180 y 181 ibídem ya analizados supra.

Segundo por fundamentar su fallo en la ausencia del elemento motivo. En efecto el fallo señala como fundamento para decretar la nulidad, la ausencia de uno de los elementos constitutivos del acto a saber el motivo ( Considerando VII). Para ello señalan que, la Administración no demuestra que, respecto del agente aduanero persona jurídica, hayan concurrido en la especie, los supuestos regulados por el artículo 254 de la LGA, en adelante LAN (Considerando VI). A mi criterio, confunde la mayoría el motivo con la legitimación. En efecto, estimo no existe la ausencia del elemento motivo por cuanto incluso el mismo recurrente reconoce la existencia del error en la declaración aduanera, respecto del cual alega falta de tipicidad como de culpabilidad, aspectos no analizados por la mayoría, que no obstante decretan la ausencia de motivo. Opino confunde la mayoría el motivo con la legitimación ad causam pasiva, que necesariamente debe existir entre el imputado

y el presupuesto de hecho a efecto de poder sancionarlo y que al final resulta en un asunto de fondo y no de nulidad.

Tercero por lo que estimo, como una contradicción en el fallo, en tanto tiene al recurrente, quien alega actuar como agente aduanero y representante legal de la indiciada, como personero de la sociedad, autorizándole su actuación en la presente causa, sea legitimándole activamente en el proceso; mientras, por otro lado, le tiene como no personero de la sociedad a efecto de estimar no ocurren los presupuestos procesales que exige el numeral 254 de la LAN. Téngase muy en cuenta que el señor Zúñiga Jiménez, no es simplemente el agente aduanero de la sociedad procesada, sino y además resulta ser, como el mismo lo alega, representante legal de la sociedad en virtud de ostentar la Gerencia Técnica de la empresa ( ver folios 1, 7, 14 del legajo levantado por la Dirección General de Aduanas, en relación con folios 4 y 8 del legajo de la Aduana).

Por último, debo señalar que el presente recurso se encuentra mal admitido, por cuanto, como lo señalaré supra, el recurrente se apersona en su doble condición de agente aduanero como representante legal de la sociedad, representación que en ninguna etapa procesal ha demostrado, conforme se exige en los numerales 133 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de aplicación supletoria en la materia, a falta de norma expresa en la LAN, y por disposición de los numerales 192 párrafo 3, 208, 257 de ese mismo cuerpo legal como 1 del Código Tributario de cita, en relación con los artículos 282 y 283 de la LGAP, siendo el deber de la Aduana haber exigido dicha personería y rechazar toda gestión en tanto no se acredite o quede firme la resolución, lo cual ocurrió al vencer el plazo para recurrir si que se acreditara legalmente la misma.

Es por todo lo anterior que me separo de la mayoría y declaro mal admitido por estar firme la resolución recurrida.

DICK RAFAEL REYES VARGAS